ACCESO A LA JUSTICIA DESDE EL JUZGADO DE PAZ Y LA NECESARIA READECUACIÓN DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD CONTENIDAS EN EL CÓDIGO PENAL GUATEMALTECO

José Gilberto Godoy Archila

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

-Paul Auster

1) ANTECEDENTES

Con el surgimiento del Código Procesal Penal como norma adjetiva principal del ordenamiento jurídico penal guatemalteco, se establecen los tipos de procesos y procedimientos aplicables para la resolución de una determinada controversia. En el caso que ocupa el presente ensayo, el Juicio de Faltas sigue siendo de vital importancia como mecanismo primario de acceso a la justicia y resolución de conflictos de naturaleza penal en las comunidades.

Aun así, en diversas situaciones, el ciudadano guatemalteco se enfrenta a un sistema que no le permite resolver sus problemas de forma pronta y eficaz, pero tiene que efectuar gastos de diversa índole, para intentar solventar una determinada situación, para lo cual se citan los siguientes ejemplos:

El señor Juan Miguel Cholutío Navichoc acude a la subestación de la Policía Nacional Civil de la localidad a reportar el hurto de una bolsa de concentrado para perro valorada en doscientos cincuenta quetzales, que se encontraba en su abarrotería y fuera hurtada por un vecino de la localidad plenamente identificado, el agente encargado recibe la denuncia y traslada la misma al Juzgado de Paz de la localidad, pero para

malestar del señor Cholutío, se le informa que su caso por sobrepasar la cuantía, tiene que trasladarse al Ministerio Público de la localidad por el delito de hurto, pero Juan no tiene ni el tiempo ni el dinero para trasladarse a la fiscalía que se encuentra en la cabecera departamental y opta por retirarse sumamente decepcionado y molesto ya que no se le hizo justicia. Antonio Hernández Yojcom, acude al Juzgado de Paz de su localidad en horas de la mañana para denunciar

verbalmente el hecho que un señor quien es su vecino y a quien conoce como Juan Carlos Osorio, en evidente estado de ira la noche anterior, con una piocha destruyó su puesto de tacos, valorando los daños ocasionados en dos mil quinientos quetzales, el juez de paz resuelve que lo denunciado no puede ser conocido en un Juzgado de Paz dentro de un juicio de faltas porque los daños sobrepasan la cantidad que la ley reconoce, en consecuencia tendrá que acudir con auxilio de su abogado al Juzgado de

Primera Instancia Penal correspondiente para plantear una “querrela”, situación que no comprende el denunciante, pero que al implicarle más gastos no tiene otra más, que desistir de accionar legalmente. Los dos casos anteriormente enunciados tienen elementos comunes: personas de escasos recursos que no pueden acceder a un sistema de justicia que comprenda sus necesidades, que por disposiciones legales, sus casos no pueden ser conocidos oficialmente por un Juez de Paz y que si desean probar otras alternativas deberán contar con auxilio profesional de un abogado, teniendo que desplazarse a la cabecera

Sus casos no pueden ser conocidos oficialmente por un Juez de Paz y si desean probar otras alternativas deberán contar con auxilio profesional, teniendo que desplazarse a la cabecera departamental o municipal.

departamental o municipal más próxima en donde exista una sede del Ministerio Público o un Juzgado de Instancia Penal competente.

2) LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA

La Declaración Universal de Derechos Humanos en artículo 8, reconoce la necesidad que tiene toda persona del derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley.

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, manifiesta que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención...” En un contexto más claro, toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos, debiéndose disponer para el efecto de mecanismos sencillos que garanticen el acceso a la justicia y la restitución de sus derechos, si estos fueron vulnerados.

En Guatemala existen leyes e instituciones encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos y a garantizar la correcta aplicación de la ley desde una instancia judicial. En este sentido el Organismo Judicial tiene una presencia exponencial garantizada en casi la totalidad de municipios de la República de Guatemala, por lo que en la mayoría de comunidades el Juez de Paz constituye el rostro primario que tiene la ciudadanía acerca de la justicia. Si bien es cierto se cuenta con una presencia mayoritaria de Juzgados de Paz en la República, por otra parte otros entes como el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Procuraduría General de la Nación, entre otros, mantienen una presencia muy limitada, radicada en su mayor parte en cabeceras departamentales y algunos cuantos municipios de la república, aspecto que tiene fuertes repercusiones en la administración de justicia, en especial para las personas que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza.

3) LA PROBLEMÁTICA DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD

El problema surge cuando el Código Penal guatemalteco que data del año 1973, establece una cantidad monetaria límite para diferenciar si una

determinada transgresión a la ley penal será conocida como un delito o como una falta, cada caso con sus procedimientos particulares. A mediados de los años ochenta y noventa del siglo pasado, el detallar daños de quinientos quetzales o hurtos de cien quetzales, era exponer una moderada o fuerte cantidad de dinero, pero que ante la constante devaluación y pérdida de valor adquisitivo del quetzal como moneda de curso legal en Guatemala, esto se traduce actualmente, que en que determinados hechos que podrían ser conocidos en un juicio de faltas mucho más sencillo y accesible a las partes, tengan que emigrar a procesos mucho más engorrosos y que representan mayores gastos a los agraviados, que incluso superan en muchas ocasiones el valor de lo reclamado por daños o hurtos ocasionados al patrimonio.

Pero un problema mayor aparece cuando hechos que podrían haber sido conocidos en un juicio de faltas y que en el peor escenario el condenado habría recibido una multa proporcional al daño causado, por no ser acontecimientos de alta trascendencia o impacto social, recibe una sanción de prisión drástica y desproporcionada, citando como caso concreto el ocurrido en un tribunal de sentencia en donde se condena a doce años de prisión incommutables a una persona que hurtó una alcancía de ofrendas de la iglesia católica que contenía la cantidad de trescientos dieciocho quetzales con cinco centavos, hecho que fue tipificado como delito de hecho sacrílego.¹ (Longo, 2016)

¿Se compensa el daño causado?, ¿Se alcanza justicia pronta y cumplida?, o únicamente se le da cumplimiento a la ley sin verificar cada caso concreto de forma proporcional, aun cuando el Juez de Paz se encuentra obligado a dar una calificación jurídica provisional o definitiva a los delitos o faltas que califica al tener conocimiento de las mismas. Pero sin que exista una reforma legislativa en dicho ámbito, el Juez de Paz seguirá con las manos atadas para actuar, y la población en general con una sensación de un sistema de justicia engorroso, caro e inaccesible.

Ante estos hechos, el legislador tiene la responsabi-

1 El artículo 255 BIS del Código Penal contiene lo relativo a los hechos sacrílegos el cual establece que “Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y robo, el objeto materia del delito sea destinado al culto, sea... alcancías..., la pena a imponer será, para el caso de hurto la de doce años (12) de prisión correccional incommutables...”. En el caso concreto al señor que hurtó la alcancía con Q318.05 se le condenó a doce años de prisión incommutables y al pago de una multa equivalente al doble de lo hurtado, es decir Q. 636.10

lidad y la oportunidad de enmendar diversidad de aspectos de las leyes penales sustantivas que establecen presupuestos alejados de la realidad nacional, o que contemplan sanciones drásticas o fuera de lugar, para los bienes jurídicos tutelados en los presupuestos de un delito o falta.

En el caso concreto diversas faltas contenidas en el apartado específico, en su mayoría dentro de las faltas contra la propiedad establecen supuestos bajo los cuales se pueden conocer las mismas, cuya última reforma data dentro de lo contenido en el Decreto 2-96 del Congreso de la República tal como se expone a continuación en sus partes conducentes:

Artículo 485. Serán sancionados con arresto de veinte a sesenta días:

- 1º Quien cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor no exceda de cien quetzales
- 2º Quien cometiere estafa, apropiación indebida u otro fraude cuyo perjuicio patrimonial no exceda de doscientos quetzales.
- 3º Quien encontrándose una cosa extraviada no la entregare a la autoridad o a su propio dueño si supere quién es y dispusiera de ella como propia, cuando su valor no exceda de trescientos quetzales...
- 6º Quien destruyere, deteriorare o perjudicare, parcial o totalmente, una cosa ajena, causando daño que no exceda de diez quetzales...
11. Quien entrare en heredad o campo ajeno o cogiere frutos, mieses u otros productos forestales, para echarlos en el acto a animales, si el valor no excede de diez quetzales...

Como se puede apreciar las cantidades expuestas distan totalmente de los valores actuales del mercado económico guatemalteco, ya que diversidad de situaciones en materia de hurto, defraudación o daños por cantidades ínfimas, podrían ser resueltos en forma más eficiente

4) PROPUESTA DE PARÁMETRO PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD

Pero en este caso, ¿cuál sería el parámetro a fijar para determinar una cantidad adecuada de dinero que

puede entrar a conocer ante la comisión de un delito o falta el Juez de Paz?, en esta situación, el autor de la presente considera que un parámetro racional, es el del salario mínimo vigente, toda vez que los daños ocasionados no sobrepasen por ejemplo un salario mínimo vigente mensual y en especial consideración, por el hecho que cada año el salario mínimo es aumentado por parte del Organismo Ejecutivo, por lo que en consecuencia será una cantidad que se modifique sin necesidad de futuras reformas.

Una reforma como la propuesta permitiría el descongestionamiento de las denuncias presentadas.

Con una herramienta de parámetro o valoración monetaria de lo que puede conocer, el Juez de Paz entre sus atribuciones, tiene la oportunidad de efectuar una labor conciliadora y de comunicación directa entre las partes, toda vez que el Juez de Paz constituye el contacto inicial de la justicia en la comunidad bajo su jurisdicción. El ciudadano acude al juzgado para satisfacer su necesidad de justicia y constituye un imperativo legal, el que se le brinde en forma sencilla y concreta una solución acorde al problema planteado. Diversos jueces permiten que se lleven a cabo audiencias sin proceso "*in voce*", es decir una audiencia conciliatoria en donde el Juez únicamente propone formas amistosas para solucionar una controversia, pero que al no existir una naturaleza coercitiva en este tipo de reuniones, en diversidad de ocasiones la parte citada no le interesa acudir o si lo hace no tiene voluntad para arribar un acuerdo satisfactorio, por lo que al no existir ningún tipo de acuerdo plasmado por escrito, la parte interesada quedará insatisfecha o decepcionada.

Tal como ya se expuso anteriormente, la fórmula que el autor considera prudente aplicar en una reforma legislativa a las faltas contenidas en el Código Penal, es la del salario mínimo mensual como parámetro de calificación de cantidades monetarias por la comisión de una infracción, esta cantidad se va modificando conforme los años y haría innecesaria una futura reforma como la más reciente que data del año mil novecientos noventa y seis, y que actualmente se ha quedado obsoleta ante las necesidades actuales en materia de administración de justicia.

Tomando en cuenta que actualmente el salario mínimo mensual oscila entre los dos mil seiscientos quetzales mensuales², una reforma como la propuesta permitiría el descongestionamiento de las denuncias presentadas ya que no tendrían que referirse las mismas al Ministerio Público o al Juzgado de Primera Instancia Penal competente, pero podrían ser conocidos por el Juez de Paz dentro del Juicio de Faltas, dando la oportunidad a que las partes dentro del contexto de dicho proceso puedan conciliar o alcanzar acuerdos que permitan la desjudicialización, sin tener que esperar audiencias de criterios de oportunidad o en el peor escenario un debate penal.

5) EL JUICIO DE FALTAS Y LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO DE ACCESO A LA JUSTICIA INMEDIATA DESDE UN JUEZ DE PAZ DE GARANTÍAS

Con la reforma propuesta se permitiría un mayor acceso a la justicia, disminuirían los costos para las partes procesales, que en diversidad de situaciones no pueden continuar con la denuncia o el proceso penal, toda vez que los costos superan el valor de lo reclamado, o simplemente no tienen los medios económicos para continuar, por lo que este acercamiento promovería un mejoramiento del rostro de la ciudadanía ante la administración de justicia desde el Juzgado de Paz.

Habrà quien cuestione y manifieste que el Juicio de Faltas debería ser eliminado del ordenamiento jurídico guatemalteco por ser un resabio del sistema inquisitivo, pero en la experiencia que el autor ha tenido como Juez de Paz, es dentro del Juicio de Faltas aplicando la conciliación como mecanismo alterno de resolución de controversias, que se ha dado una respuesta inmediata a las partes en conflicto, quienes salen satisfechas por los acuerdos alcanzados y en caso de llevarse a cabo el juicio oral y público, se encuentra garantizado el derecho del debido proceso, y el derecho de impugnar lo resuelto ante el Juez de Primera Instancia competente por lo actuado por parte de un Juez de Paz de garantías.

Esta medida permitirá un mayor acercamiento de la justicia a la población guatemalteca, descongestionará la cantidad de expedientes que actualmente conocen los Jueces de Primera Instancia Penal o los Jueces de Paz competentes dentro del procedimiento de delitos menos graves, como en el caso del delito de

² Por medio del Acuerdo Gubernativo número 288-2016, de fecha 29 de diciembre de 2016, el Presidente de la República acuerda fijar los salarios mínimos para las actividades agrícolas, no agrícolas, exportadoras establece como salario mínimo para las actividades agrícolas, no agrícolas, de la actividad exportadora y de maquila.

daños contemplado actualmente en el Código Penal y su competencia dentro del Código Procesal Penal guatemalteco.

6) A MODO DE CONCLUSIÓN

Paulatinamente y dentro de las posibilidades financieras y presupuestarias del Estado, se deben promover condiciones para una mayor presencia del Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en los diferentes municipios de la República de Guate-

Habrà quien se oponga
al Juicio de Faltas, pero la
experiencia ha demostrado
que permite dar una respuesta
inmediata a las partes del
conflicto, quienes salen
satisfechas por los acuerdos
alcanzados.

mala en especial en las áreas densamente pobladas y alejadas de las cabeceras departamentales para promover un eficaz desarrollo de la administración de justicia con la presencia de dichos entes auxiliares de la misma.

Ante la falta de representación de los entes anteriormente indicados, a la ciudadanía de la mayoría de municipios de la República, le toca decidir si asumen los gastos de traslado para acudir a una fiscalía o juzgado de instancia penal y el pagar los honorarios para los abogados que intervengan, o por el contrario deciden seguir trabajando para sobrevivir y obtener recursos para las necesidades básicas de alimentación, ante un sistema de justicia visto como caro, engorroso y tardado.

Ante lo anteriormente expuesto, mientras que no se implementen en forma generalizada la presencia de los entes auxiliares de la administración de justicia en una forma de presencia mayoritaria, el Estado de Guatemala debe promover mecanismos y alternativas legales para que la población mayoritaria tenga acceso inmediato a la justicia y en especial en cuanto a asuntos que constituyen meras infracciones o contravenciones a la ley que por su bajo impacto social tienen que ser conocidas y resueltas a la brevedad dentro del contexto del Juicio de Faltas.

Que mejor mecanismo, que la justicia inmediata y directa que puede ofrecer un Juzgado de Paz, que tiene presencia mayoritaria en casi todos los municipios de la República de Guatemala, para solventar todo lo relativo a las faltas contra la propiedad, con lo cual el ciudadano común percibirá en consecuencia una sensación de contacto directo con la justicia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Documentos en Línea**

Longo, M. J. (9 de Noviembre de 2016). Condenado a 12 años de cárcel por robar ofrendas de parroquia. Obtenido de Prensa Libre: <http://www.prensalibre.com/guatemala/quetzaltenango/condenado-a-12-aos-por-robar-ofrendas-de-parroquia>

- **Legislación Nacional e Internacional**

Constitución Política de la República de Guatemala aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas

Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18-07-1978.

Declaración Universal Sobre Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 -12-1948.

Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal y sus reformas.

Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal y sus reformas.

Sobre el autor

JOSÉ GILBERTO GODOY ARCHILA

Magíster Artium en Política y Derecho Internacional con distinción Cum Laude, Universidad Francisco Marroquín. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario con distinción Cum Laude, Universidad Rafael Landívar. Trabajó como asesor jurídico del área de Derecho de Vía de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Actualmente desempeña el cargo de Juez de Paz del Municipio de San Juan la Laguna del departamento de Sololá.